

EL PROFESOR DE HISTORIA, CON ESPECIALIDAD EN LATINOAMÉRICA, JUAN LUIS HERNÁNDEZ, RECORRE LOS HITOS DE LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA EN EL GOLPE QUE DERROCÓ AL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE EVO MORALES.

La injerencia externa en el golpe de Estado en Bolivia



El domingo 10 de noviembre de 2019, un golpe de Estado cívico-policial-militar derrocó en Bolivia al gobierno constitucional del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por Evo Morales y Álvaro García Linera. Fue la culminación de una crisis política, iniciada en la noche del 20 de octubre, cuando la oposición liderada por Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, denunció un supuesto fraude en el conteo provisorio de los votos de las elecciones presidenciales, realizadas ese mismo día. Comenzaron entonces las protestas en las principales ciudades, protagonizadas por las clases medias opuestas a la “reelección indefinida” de Evo, que escalaron rápidamente en duros enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición. En este contexto, se produjo el 2 de noviembre un acontecimiento decisivo, cuando Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico¹ de Santa Cruz, hizo un llamado directo al amotinamiento de la policía. El viernes 8 se amotinaron efectivos policiales en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. En cuestión de horas,



el movimiento se extendió a las restantes capitales departamentales, en una acción claramente concertada. En paralelo, grupos de choque organizados por la derecha, comenzaron un sistemático ataque a instalaciones estatales y a funcionarios gubernamentales, obligándolos a renunciar a sus cargos bajo amenaza de atentados a sus familiares y destrozos e incendios de sus viviendas. El golpe final-

mente se impuso el 10 de noviembre de 2019, cuando el jefe del ejército, general Williams Kalliman, “sugirió” públicamente la renuncia del presidente.

Existe una vasta discusión sobre los acontecimientos que desembocaron en el derrocamiento del gobierno del MAS en noviembre de 2019. Como señalamos en otra oportunidad², todo golpe de Estado requiere para materializarse un plan conspirativo exitoso y una dirección política decidida, a lo que se debe agregar un cierto desgaste del régimen político existente, que genera la posibilidad de su derrocamiento. En esta contribución queremos referirnos específicamente a otro factor, recurrente en la historia latinoamericana: la injerencia externa.

El gobierno de facto

Mientras Evo Morales, García Linera y otros funcionarios intentaban salir del país, la plana mayor del golpismo se reunía en La Paz para planificar sus próximos pasos. Las reuniones se realizaron los días 10 y 11 de noviembre de 2019, con



(Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico de Santa Cruz, hizo un llamado directo al amotinamiento de la policía. El viernes 8 se amotinaron efectivos policiales en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. En cuestión de horas, el movimiento se extendió a las restantes capitales departamentales, en una acción claramente concertada.



(Aun cuando quedan muchos puntos oscuros, lo que se conoce hasta ahora sobre la asunción del gobierno de facto, demuestra la injerencia de factores externos articulados con el núcleo duro golpista.

el auspicio de la Conferencia Episcopal Boliviana, en instalaciones de la Universidad Católica. Participaron los principales dirigentes golpistas o sus representantes, y “facilitadores” diplomáticos de la Unión Europea y de España (algunas versiones incluyen también al embajador de Brasil).

En estas reuniones se decidió, por fuera de los mecanismos institucionales, la asunción de la senadora Jeanine Añez como “presidenta interina”, que asumió rodeada por militares el martes 12 de noviembre. Los distintos testimonios sobre estas deliberaciones, coinciden en destacar la participación de Jorge “Tuto” Quiroga, quien actuó como enlace con las fuerzas armadas. Quiroga, uno de los dirigentes históricos de la derecha boliviana, ex vicepresidente de Hugo Banzer y presidente del país (2001-2002), fundador del partido PODEMOS, es conocido por sus vínculos con políticos derechistas bolivianos radicados en Estados Unidos, y con organismos de ese país, como la DEA y la CIA. Aun cuando quedan muchos puntos oscuros, lo que se conoce hasta ahora sobre la asunción del gobierno de facto, demuestra la injerencia de factores externos articulados con el núcleo duro golpista.³

Estados Unidos y la preparación del golpe

Los intereses estadounidenses sobre el litio, en abierta puja comercial con China,

quedaron en Bolivia descolocados cuando la empresa estatal Yacimientos de Lito Bolivianos (YLB) firmó en octubre de 2018 un convenio con la empresa alemana (ACI Systems), que preveía la construcción de plantas productoras de hidróxido de litio y en un futuro, baterías de litio. Un convenio similar se firmó en agosto de 2019, con la empresa china Xingjian Group Company, para la provisión de carbonato de litio, otro subproducto del mineral. En Estados Unidos, estos pasos del gobierno boliviano alertaron a diversos actores, desde organismos estratégicos, como el American Council, hasta empresas como Strategic Forecasting (StratFor), una reconocida plataforma privada de inteligencia y espionaje. Cabe señalar que ambos convenios fueron impugnados por el Comité Cívico de Potosí, alegando que las regalías departamentales eran muy bajas. Los cívicos de Potosí, liderados por Marco Antonio Pumari, aliados a los de Santa Cruz, dirigidos por Luis Fernando Camacho, constituyeron el núcleo duro de las fuerzas civiles que motorizaron el golpe de noviembre de 2019.⁴

(Distintas organizaciones estadounidenses utilizaron la denuncia de “fraude electoral” como estrategia comunicacional, con el propósito de diseminar sospechas de manipulación de los comicios que operaran, en el momento oportuno, como factor desestabilizador de la situación política boliviana.

El otro aspecto en el cual se involucró activamente Estados Unidos fue la preparación del clima político y simbólico en que se incubó el golpe. Desde mucho antes del 20 de octubre de 2019, distintas organizaciones estadounidenses utilizaron la denuncia de “fraude electoral” como estrategia comunicacional, con el propósito de diseminar sospechas de manipulación de los comicios que operaran, en el momento oportuno, como factor desestabilizador de la situación política boliviana. Ya en septiembre de 2018 *StratFor* afirmaba: “[...] Una elección muy disputada, en donde proliferen las acusaciones de fraude electoral, podría prender la llama en una escena política interna ya tensa [...]”⁵ Siguiendo



(La responsabilidad del gobierno de Donald Trump en los preparativos golpistas, quedó confirmada con la visita a Bolivia del subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Kevin O'Reilly. Este funcionario llegó a La Paz el 24 de julio de 2019, y de inmediato tuvo varios encuentros con dirigentes políticos opositores en esa ciudad y en Santa Cruz.

esta línea, la *National Endowment for Democracy (NED)*, una organización fundada en 1983 a iniciativa del presidente Ronald Reagan, con el objetivo de impulsar la “democracia liberal” en el mundo, financió todo tipo de publicaciones de la derecha en Bolivia y fuera del país, que alertaban sobre la inminencia de un fraude en las elecciones del 20 de octubre, desde por lo menos un año antes que los comicios tuvieran lugar.⁶

La responsabilidad del gobierno de Donald Trump en los preparativos golpistas, quedó confirmada con la visita a Bolivia del subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Kevin O'Reilly. Este funcionario llegó a La Paz el 24 de julio de 2019, y de inmediato tuvo varios encuentros con dirigentes políticos opositores en esa ciudad y en Santa Cruz. El 25 de julio, en una cena con delegados de la OEA, Unión Europea, Brasil, Perú y Argentina, O'Reilly reclamó que los gobiernos de estos tres países “levanten la voz” sobre la transparencia del futuro acto electoral, ya que el gobierno norteamericano manejaba la

hipótesis de un “escenario de fraude”. La clarividencia del funcionario era tal, que hasta mencionó como puntos críticos “la organización, el área informática e incluso el sistema de conteo rápido”, en los que podían presentarse “problemas de transparencia”. Tres meses y medio antes de las elecciones, el gobierno de Estados Unidos ya sabía cuál iba a ser el detonante de la crisis. No era magia, hacía tiempo que participaba en la trama golpista.⁷

La intervención de la OEA

Como es sabido, la OEA envía observadores a los actos electorales de los países miembros.

No habían transcurrido 24 horas del cierre de los comicios del 20 de octubre, cuando ya la Misión de Observación Electoral de la OEA en Bolivia dio a conocer su primer comunicado. Expresaba su sorpresa por el “cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares”, lo cual habría generado “pérdida de confianza en el proceso electoral”. Extralimitando claramente sus funciones,

(Extralimitando claramente sus funciones, apoyándose en meras suposiciones, la OEA avalaba las acusaciones de “fraude electoral” esgrimidas por la oposición. Un comunicado firmado por el secretario general, Luis Almagro, reclamaba directamente la anulación de las elecciones del 20 de octubre, en sintonía con la oposición.

apoyándose en meras suposiciones, la OEA avalaba las acusaciones de “fraude electoral” esgrimidas por la oposición.⁸

Ante el agravamiento de la crisis y el recrudecimiento de la violencia, en un intento de lograr una salida negociada, el gobierno aceptó que la OEA realizara una auditoría integral de carácter vinculante. El 10 de noviembre por la mañana, en el punto álgido de la crisis, la OEA dio a conocer el Informe Preliminar de la auditoría electoral. Concluía que “se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas. Esto lleva al equipo técnico auditor a cuestionar la integridad de los resultados de la elección del 20 de octubre pasado”.

(Según las leyes argentinas quedaría configurado el delito de contrabando, por el cual podrían resultar procesados no solo el personal actuante, sino también los jefes de las fuerzas de seguridad que impartieron las órdenes y coordinaron el envío, así como los ex ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Oscar Aguad (Defensa), Jorge Faurie (Cancillería), y hasta el propio Mauricio Macri.

En paralelo, un comunicado firmado por el secretario general, Luis Almagro, reclamaba directamente la anulación de las elecciones del 20 de octubre, en sintonía con la oposición.

Es interesante señalar que en el Informe Final de la OEA, presentado el 4 de diciembre de 2019, el énfasis ya no está puesto en las “irregularidades”, dado que aun dándolas por válidas no alcanzan a modificar los resultados electorales, sino en un “marcado cambio de tendencia” en el tramo final del recuento de los votos, que por su magnitud “coloca en duda la credibilidad del proceso”.⁹ No hay pruebas materiales que avalen las conclusiones,

solo consideraciones relativas a probabilidades estadísticas. Estudios posteriores cuestionaron tanto la metodología como los resultados del Informe Final, negando la existencia de cambios bruscos de tendencia en el recuento de los votos.¹⁰

Con una pequeña ayuda de mis amigos... sudamericanos

Apenas instalado el gobierno de facto, recibió importante ayuda de varios gobiernos sudamericanos. En las primeras horas del 13 de noviembre, el gobierno de Brasil, mediante un comunicado de su cancillería, reconoció oficialmente a Añez como presidenta interina de Bolivia. El entonces presidente de Ecuador, Lenin Moreno, envió al gobierno de facto, en calidad de “préstamo”, 5.500 granadas y 2.949 proyectiles de diverso tipo, entre otros elementos represivos, según consta en un documento oficial del Ministerio de Gobierno de Ecuador, divulgado hace unos meses por las autoridades bolivianas.

En este contexto, en el que gobernantes sudamericanos realizaban las tareas que



Estados Unidos estaba imposibilitado de cumplir –como reclamara en su momento el subsecretario O'Reilly– se inscribe el envío de armas a Bolivia efectuado por el gobierno de Mauricio Macri. La operación tomó estado público cuando en la Embajada argentina en La Paz se localizó una carta de agradecimiento, firmada por el entonces jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB), general Jorge Gonzalo Terceros Lara, dirigida al embajador argentino, Normando Álvarez García, por el envío de las municiones.

En las primeras horas del 13 de noviembre de 2019, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina aterrizó en el aeropuerto de El Alto, Bolivia. Trasladaba integrantes del Grupo Alacrán, de la Gendarmería, con la misión oficial de resguardar la Embajada argentina, y transportaba también una carga de 70.000 cartuchos de munición antitumulto, granadas, sprays de gases lacrimógenos y otros elementos represivos. Inmediatamente, personal de la FAB retiró del mismo aeropuerto unas

(Lo que queda claro es el abierto respaldo del gobierno de Macri al golpe de Estado en Bolivia, y a la represión desatada por los golpistas contra la movilización popular, que en los días posteriores al envío se cobró decenas de vidas, en las masacres de Huayllani (Cochabamba) y Senkata (El Alto).

40.000 balas (las aludidas en la carta de Terceros Lara), mientras el material restante, cargados en vehículos oficiales de la Legación argentina, fueron posteriormente entregadas a la Policía de Bolivia.

Cuando estalló el escándalo, Álvarez García –en la actualidad funcionario del gobierno de Gerardo Morales en Jujuy– negó toda vinculación con la operación, aunque terminó admitiendo que pudo haber existido un “circuito paralelo”. No es un comentario menor: parte del cargamento transportado a Bolivia no estaba declarado en el manifiesto de vuelo del Hércules C-130, y el armamento que recibió la Policía de Bolivia fue entregado sin detalle documental, como lo corroboró el jefe de policía ante las autoridades judiciales bolivianas.

Así las cosas, según las leyes argentinas quedaría configurado el delito de contrabando, por el cual podrían resultar procesados no solo el personal actuante, sino también los jefes de las fuerzas de seguridad que impartieron las órdenes y coordinaron el envío, así como los ex ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Oscar Aguad (Defensa), Jorge Faurie (Cancillería), y hasta el propio Mauricio Macri. Ya existe, en las actuaciones de la justicia argentina y boliviana, suficiente material probatorio como para impulsar los procesamientos. Pero más allá de los ilícitos cometidos, lo que queda claro es el abierto respaldo del gobierno de Macri al golpe de Estado en Bolivia, y a la represión desatada por los golpistas contra la movilización popular, que en los días posteriores al envío se cobró decenas de vidas, en las masacres de Huayllani (Cochabamba) y Senkata (El Alto). Todo ello en sintonía con el accionar de los gobiernos sudamericanos alineados con los Estados Unidos.¹¹

A modo de conclusión, podemos decir que la injerencia externa en los procesos contra-

revolucionarios en América Latina no es un fenómeno novedoso, solo adopta nuevas modalidades. Pero para ser eficaz debe articularse con factores internos, sin esta conexión no es viable ninguna estrategia desestabilizadora. Este es el hilo conductor que hemos intentado seguir en este artículo, tratando de mostrar el despliegue internacional de la derecha y su incidencia en los sucesos de octubre-noviembre de 2019 en Bolivia.

Juan Luis Hernández

Profesor de Historia, especializado en historia latinoamericana contemporánea.

Notas

1. Los Comités Cívicos son organizaciones civiles departamentales (provinciales), en las que participan empresarios, ganaderos, transportistas, representantes del comercio y los servicios, que normalmente se ocupan de asuntos regionales.
2. Juan Luis Hernández. "Bolivia 2019-2020. Crisis política, golpe de Estado, retorno a la institucionalidad", en *Ni Calco Ni Copia* N° 9. 2021. Buenos Aires Argentina, pp. 55-80.
3. Las primeras revelaciones sobre los cónclaves golpistas fueron hechas por María Galindo, cuando todavía gobernaba Añez. Este año se conocieron los testimonios de Adriana Salvatierra y Teresa Morales, dirigentes del MAS, y finalmente, apareció un

comunicado de la Conferencia Episcopal Boliviana ("La falsedad genera injusticia", 19/03/2021), dando cuenta de la reunión. Ver: <http://m.la-razon.com/nacional/conade-anez-bolivia-sucesion-morales-evo-y-iglesiaviva.net/2021/03/19/comunicado-la-falsedad-genera-injusticia/>

4. Agustina Sánchez. "Detrás del golpe: La industrialización del litio en Bolivia." Disponible en: <https://www.clacso.org/detras-del-golpe-la-industrializacion-del-litio-en-bolivia/>

5. Silvia Romano, Tamara Lajtman, Aníbal García Fernández y Arantxa Tirado. "EE. UU. y la construcción del golpe en Bolivia." Celag.org., 2019, p. 3. Disponible en: <https://www.celag.org/wp-content/uploads/2019/11/ee-uu-y-la-construccion-del-golpe-en-bolivia-1.pdf>

6. NED. Disponible en: www.ned.org.

7. *La Razón*, 14/07/2021. La información está extraída de un cable diplomático localizado en la Embajada argentina en La Paz.

8. Declaración de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Bolivia, 21 de octubre de 2019.

Disponible en: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-085/19.

9. Disponible en: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-028/19.

10. Anatoly Kurmanaev y María Silvia Trigo. "Una elección amarga. Acusaciones de fraude. Y ahora, una reconsideración", en *The New York Times*, 07/06/2020. Disponible en:

<https://www.nytimes.com/es/2020/06/07/espanol/america-latina/elecciones-bolivia-evo-morales.html>.

11. Los datos proceden de Portales de Noticias oficiales del gobierno boliviano en la web.